

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA**

La demandante acredita más de un año de servicios ininterrumpidos realizando labores de naturaleza permanente, por lo tanto, no se puede excluir su derecho a la reposición laboral, dado que se encuentra dentro del ámbito de protección del artículo 1 de la Ley N.º 24041.

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno

**LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**

VISTA: la causa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante **Mónica Juliana Benites Vargas**, contra la sentencia de vista de fecha 19 de marzo de 2018, de fojas 202 y siguientes, que revocó la apelada emitida en primera instancia de fecha 14 de octubre de 2016, de fojas 161 y siguientes, que declaró fundada en parte la demanda, y reformándola la declararon infundada; en el proceso contencioso administrativo seguido contra la **Municipalidad Distrital de Bellavista**, sobre reincorporación laboral conforme a la Ley N.º 24041.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Mediante resolución de fecha 06 de noviembre de 2019, el recurso de casación ha sido declarado procedente por la siguiente causal: **infracción normativa del artículo 122 del Código Procesal Civil**; y, de forma excepcional por la causal: **infracción normativa del artículo 1 de la Ley N.º 24041**, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre las citadas causales.

CONSIDERANDO

De la pretensión demandada

Primero. De la lectura del escrito de demanda, la accionante solicita se declare la nulidad de la Resolución Ficta que deniega la solicitud de reincorporación al cargo

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA**

de secretaria de la división de servicios sociales bajo la relación laboral de contrato a plazo indeterminado dentro del marco de la Ley N.º 24041.

Pronunciamiento de las instancias de mérito

Segundo. El Juez del Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Sullana, mediante sentencia de fecha 14 de octubre de 2016, de fojas 161 y siguientes, declaró fundada en parte la demanda, al considerar que la demandante ha laborado desde el 02 de enero del 2012 al 19 de enero del 2015, de manera continua y en labores de naturaleza permanente, acumulando 03 años y 19 días de servicios de manera ininterrumpida, es por ello que goza de los beneficios de la Ley N.º 24041; por lo que no podía ser cesada o destituida sino por causa previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276. En consecuencia, corresponde su reposición al trabajo como apoyo en el área de sistema de focalización de hogares (SISFOH), lo que no implica el ingreso a la carrera administrativa, puesto que para ello se requiere necesariamente de concurso público.

Tercero. Por su parte, el Colegiado de la Sala Laboral Transitoria de la citada Corte Superior, mediante sentencia de vista de fecha 19 de marzo de 2018, de fojas 202 y siguientes, revocó la apelada, y reformándola la declararon infundada, sustentando que la demandante no laboró por más un año ininterrumpido en la misma oficina, pues de enero a febrero de 2013 no ha acreditado en que oficina se desempeñó y durante los períodos de abril a junio, agosto y octubre de 2014, se tiene que laboró en diferentes oficinas, por lo que, acorde con lo precisado en el noveno fundamento de la Casación N.º 12480-2015, el hecho de haberse desempeñado en distintas áreas u oficinas, sin haber permanecido por más de un año, imposibilita comprobar que las labores desempeñadas por la demandante fueron permanentes, conforme lo exige el artículo 1 de la Ley N.º 24041.

Infracción normativa

Cuarto. La infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA**

examinado por medio de un recurso de casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar a la infracción normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando apertura a que la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de casación.

Quinto. En el presente caso se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante por la siguiente causal: **infracción normativa del artículo 122 del Código Procesal Civil**; y, de forma excepcional por la causal: **infracción normativa del artículo 1 de la Ley N.º 2 4041**, de lo que se establece lo siguiente:

Artículo 122 del Código Procesal Civil: establece cuál debe ser el contenido esencial de una resolución para considerarla como debidamente motivada. Así, en este numeral se señala que las resoluciones, en este caso las sentencias, deben contener una mención de los fundamentos de hecho y sus respectivos fundamentos de derecho, remitiendo a la norma aplicable al caso concreto.

Artículo 1 de la Ley N.º 24041.

“Artículo 1.- Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma Ley”.

Delimitación de la controversia

Sexto. En el presente caso corresponde efectuar el análisis sobre la existencia de la debida motivación de la sentencia de vista, dado que ésta ha decidido revocar la apelada declarando infundada la demanda, considerando que la demandante no se encuentra dentro del alcance del artículo 1 de la Ley N.º 24041.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA**

Análisis de la controversia

Sétimo. Respecto a la infracción normativa del artículo 122 del Código Procesal Civil, corresponde señalar que guarda una estrecha relación con la motivación escrita de las resoluciones judiciales como principio y derecho de la función jurisdiccional, tal como lo establece el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y las normas de desarrollo legal. Ello obliga a los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresar las razones de hecho y de derecho que los ha llevado a decidir, debiendo existir en esta fundamentación, congruente; esto es, debe pronunciarse respecto a los hechos invocados por las partes y conforme al petitorio formulado, debiendo expresar una suficiente justificación de la decisión adoptada asegurando la impartición de la justicia con sujeción a la Constitución Política del Estado y a la Ley, tal como lo establecen los incisos 3) y 4) del artículo 122 del Código Procesal Civil; dicho deber implica que los juzgadores expresen el razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de congruencia. En este sentido, se puede apreciar que el Colegiado Superior ha empleado los fundamentos que a su criterio considera pertinentes para revocar la sentencia apelada, por lo tanto, no se podría valorar por medio, el derecho que alega la demandante, siendo infundado la causal denunciada.

Octavo. En relación a la causal de infracción normativa del artículo 1 de la Ley N.º 24041, es claro cuando señala que para que el trabajador no sea cesado ni destituido, sino, por las causales previstas en la Ley, debe haber sido contratado para cumplir labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido de servicios en la Administración Pública, mas no le reconoce a dicho servidor el derecho de ingreso a la carrera pública como servidores nombrados; pues tal como se desprende del texto del artículo 12 del Decreto Legislativo N.º 276 y de los artículos 28 y 40 del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 005-90-PCM, para adquirir dicha condición deberán concursar y ser evaluados previamente de manera favorable.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA

Noveno. En cuanto a la norma materia de análisis, resulta pertinente enunciar que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que, para efectos de su aplicación, básicamente determina dos requisitos, esto es: *i) que la parte trabajadora haya realizado labores de naturaleza permanente; y, ii) que dichas labores se hayan desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido.*

Décimo. Como se advierte del análisis de dicha norma, esta es aplicable a los supuestos para no ser cesado ni destituido de la administración pública, a excepción de las causas previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276, es decir, esta norma tiene como finalidad proteger al trabajador que realiza labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido, frente al despido arbitrario de la administración, con ello brinda el marco legal para que los trabajadores que se encuentren en tal situación no sean despedidos sin el procedimiento previo y las causales establecidas en la Ley.

Décimo primero. En este sentido, en cuanto a la aplicación de la Ley N.º 24041, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido como precedente vinculante en la Casación N.º 5807-2009 Junín de fecha 20 de marzo de 2012, que los trabajadores que pretende proteger la norma son los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, entendida ésta como aquella que es constante por ser inherente a la organización y funciones de la Entidad Pública, así como a los servicios que brinda la misma. Indicando que no es exigencia para la aplicación de la protección prevista en dicha Ley que el trabajador haya ingresado a la carrera pública mediante concurso público.

Décimo segundo. En el presente caso, se debe determinar si la prestación de servicios de la recurrente, ha sido desnaturalizada y en aplicación del principio de primacía de la realidad, puede ser considerado un contrato de trabajo permanente, porque de ser así, el artículo 1 de la Ley N.º 24041, brindaría la protección conforme a un trabajador contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276. Así, en la sentencia emitida en el Expediente N.º 1944-2002-AA/TC, se

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA**

estableció que mediante el referido principio “[...] *en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos*” (fundamento 3).

Análisis del caso concreto

Décimo tercero. En ese orden de ideas, en caso que un trabajador sujeto a las reglas del Decreto Legislativo N.º 276 y artículo 1 de la Ley N.º 24041, haya probado que su contratación se ha desnaturalizado, esto es, por haber laborado más de un año de manera ininterrumpida en labores de naturaleza permanente y sin que exista causa justificante prevista en la Ley, no se podrá denegar su derecho aduciendo que su ingreso no se realizó por concurso público de méritos, pues como se señalara precedentemente, en estos casos no nos encontramos frente al ingreso a la carrera administrativa, sino a no ser cesados arbitrariamente, cuando se cumplieron los requisitos que la referida Ley contiene.

Décimo cuarto. El artículo 62 de la Constitución Política del Perú, establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato, y que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con su artículo segundo inciso 14) que reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.

Décimo quinto. El Tribunal Constitucional en la Sentencia N.º 1944 -2002-AA/TC, precisa que existe presunción de la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: la prestación personal de servicio, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración). Es decir, el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual este se obliga a prestar servicios en beneficio de aquel de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de trabajo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA

Solución del caso concreto

Décimo sexto. Como se puede apreciar la actora solicita se ordene su reposición en el cargo de secretaria de la división de servicios sociales; sin embargo, de los medios probatorios actuados y sus fundamentos fácticos, se aprecia que culminó sus labores en el área de sistema de focalización de hogares (SISFOH). En tal razón, es cuestión en debate en primer lugar, verificar el tipo de relación laboral existente entre las partes, para determinar si existió desnaturalización de los contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios, y si los hechos se subsumen en el artículo 1 de la Ley N.º 2 4041.

Décimo sétimo. En ese sentido, se aprecia que la demandante ha ingresado a laborar desde agosto del año 2007 hasta el 19 de enero de 2015, advirtiendo que de sus contratos desde la fecha de ingreso hasta el 31 de agosto de 2008, ha laborado como trabajadora obrera en el área de limpieza pública de la entidad emplazada, período que no puede ser valorado en este proceso, dado que la labor de limpieza pública es regulada por el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, dispuesto a los obreros de las municipalidades conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N.º 27972. Posteriormente desde diciembre de 2008 hasta setiembre de 2011, ha laborado en distintas áreas de la emplazada con funciones administrativas como apoyo administrativo, con contratos de locación de servicios y contratos administrativos de servicios, de manera alternada, observándose interrupciones entre los períodos laborados, por lo que no se podría amparar la permanencia que exige el artículo 1 de la Ley N.º 24041 en estos periodos.

Décimo octavo. Por otro lado, de los medios probatorios analizados, se establece que el período del 02 de enero del año 2012 hasta el 19 de enero de 2015, del cual se advierte que la demandante ha laborado de manera ininterrumpida, lo que implica un pronunciamiento a partir de los períodos antes descritos. En este sentido, se observa que ha laborado bajo distintas modalidades de contratos, es decir, contratos de locación de servicios, contratos administrativos de servicios e incluso en algunos períodos sin contratos firmados, desempeñándose como

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA**

(apoyo); desde el 02 de enero hasta el 31 de julio de 2012, en la división de desarrollo urbano; desde agosto de 2012 hasta enero de 2013 no especifica en que área trabajó, solo adjunta recibos por honorarios por las remuneraciones en dichos meses; desde febrero de 2013 hasta diciembre de 2014, trabajó como apoyo en el área de sistema de focalización de hogares (SISFOH), concluyendo sus contratos el 19 de enero de 2015, siendo que en el contrato de locación de servicios no se especificó el área en la que laboró. Ante lo expuesto, debemos de hacer mención que el cargo de “apoyo”, está considerado dentro del grupo ocupacional de los auxiliares, conforme el artículo 9 inciso c) del Decreto Legislativo N.º 276 y en concordancia con lo establecido por el artículo 4 inciso 3.d) de la Ley N.º 28175, Ley Marco del Empleo Público, lo que permite considerarla como servidora pública, lo que deja claro el carácter permanente de sus labores para la emplazada.

Décimo noveno. De lo expuesto, se puede concluir que la labor de la actora no implica una labor eventual, sino permanente, porque ésta ha sido realizada de forma continua, diaria y sujeta a un horario determinado; en tal sentido, se ha acreditado que la demandante viene laborando para la municipalidad emplazada de forma permanente e ininterrumpida, desde el 02 de enero de 2012 hasta el 19 de enero de 2015, es decir, más de 3 años de labores continuas, con contratos de locación de servicios, contratos administrativos de servicios y hasta sin contratos, realizando siempre labores de naturaleza permanente, por lo que se concluye que se encuentra bajo la protección del artículo 1 de la Ley N.º 24041.

Vigésimo. Por otro lado, el Colegiado Superior decide revocar la sentencia de grado al considerar que la accionante no ha realizado trabajos en una sola área, lo que implica que sus labores no han sido continuas; tal argumento no es tan certero, puesto que como se puede advertir, hubo continuidad laboral, y si en algunos contratos no se especificó las áreas en las que la demandante realizaría sus labores, ésta es íntegramente responsabilidad del empleador, por lo que, en aplicación del artículo 26 de la Constitución Política del Estado, no se podría desconocer los derechos ganados por los trabajadores, ni ser discriminados, ni renunciar a ellos, así como la aplicación de la interpretación de la norma más

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA

favorable para el trabajador en caso de duda insalvable. En consecuencia, habiéndose dejado establecida la condición laboral permanente de la demandante por más de 3 años ininterrumpidos, si bien es cierto inicialmente solicitó su reposición en el cargo de secretaria de la división de servicios sociales, también es cierto que concluyó sus labores en el área de sistema de focalización de hogares (SISFOH), lo que sí se puede evidenciar a comparación del cargo de secretaria; en tal sentido, se le debe reponer al trabajo como personal de apoyo en dicha área, al haber laborado como contratada bajo los alcances del Decreto Legislativo N.º 276 y al amparo del artículo 1 de la Ley N.º 24041; motivo por el cual, la causal declarada procedente deviene en fundada.

Vigésimo primero. Por otro lado, al haberse determinado que la demandante fue contratado en el siguiente período: febrero a marzo 2013, agosto 2013 y setiembre a octubre 2014, y no bajo el régimen especial de la Contratación Administrativa de Servicios, pese a que ya se encontraba vigente el Decreto Legislativo N.º 1057, que en su Cuarta Disposición Complementaria Final establece que las entidades públicas quedan prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos, por lo tanto, debe remitirse copias de las sentencias de las instancias de mérito y de la presente resolución a la **Contraloría General de la República** a fin de que determine quién o quiénes tuvieron responsabilidad en la inobservancia de dicha disposición; y, de ser el caso, establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley N.º 27444.

DECISIÓN:

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido por el artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la demandante **Mónica Juliana Benites Vargas**; en consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista de fecha 19 de marzo de 2018, de fojas 202 y siguientes; y, actuando en sede de instancia, **CONFIRMARON** la sentencia apelada emitida en primera instancia de fecha 14 de octubre de 2016, de fojas 161 y siguientes, que declaró **FUNDADA EN PARTE** la demanda; **OFICIÁNDOSE a la**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA**

**CASACIÓN N.º 11662- 2018
SULLANA**

Contraloría General de la República, para los fines pertinentes, con copia de las sentencias de las instancias de mérito y de la presente resolución; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a Ley; en el proceso seguido contra la **Municipalidad Distrital de Bellavista**, sobre reincorporación laboral conforme a la Ley N.º 24041. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema **Álvarez Olazábal**; y, los devolvieron.-

S.S.

TELLO GILARDI

TORRES VEGA

UBILLUS FORTINI

ALVAREZ OLAZABAL

LINARES SAN ROMAN

Javr/Fgp